

El poder popular está abriendo camino al futuro de los derechos humanos

En 2019 se intensificaron las amenazas al sistema internacional de protección de los derechos humanos. Las salvaguardias se fueron debilitando a medida que quienes se consideraban los defensores tradicionales de los derechos humanos en la región, incluidas las instituciones regionales e internacionales y los gobiernos nacionales, cedían cada vez más. Al mismo tiempo, Rusia y China, actores políticos y económicos clave en Europa Oriental y Asia Central, intentaron socavar activamente la estructura internacional de derechos humanos y las instituciones encargadas de protegerla.

La región de Europa Oriental y Asia Central no fue una excepción en esta desalentadora tendencia. Muchos de sus gobiernos emprendieron una amplia ofensiva. Se reprimió sistemáticamente el derecho a la libertad de expresión, de asociación y de reunión pacífica, se desatendieron los derechos económicos y sociales, y se rechazó a personas refugiadas, se las dejó abandonadas a su suerte o se las devolvió a destinos donde aún corrían peligro. Al mismo tiempo, continuó la discriminación contra las mujeres, las minorías étnicas y otras comunidades minoritarias y los grupos marginados.

No obstante, en sintonía con las tendencias globales, y a menudo con un gran coste personal, innumerables personas corrientes se sumaron a protestas pacíficas en toda la región para exigir respeto a los derechos humanos y una vida mejor y más digna para ellas y sus sociedades. En particular, las voces de quienes luchaban contra la corrupción y en defensa de las mujeres y del medio ambiente adquirieron mayor notoriedad en la protesta y la acción colectivas. Asuntos como el deterioro progresivo de las condiciones de vida, los desalojos forzados y las elecciones fraudulentas fueron algunos de los factores que impulsaron el avance del poder popular en Europa Oriental y Asia Central.

De Bielorrusia a Kazajistán, el derecho de reunión estuvo sujeto a fuertes restricciones; con contadas excepciones; para cualquier clase de protesta en la calle era necesario el permiso oficial, y las manifestaciones protagonizadas por una sola persona se consideraban a menudo “ilegales”. De Azerbaiyán a Rusia, se respondió a las concentraciones pacíficas con violencia policial y acciones penales contra organizadores y participantes. Ningún país de la región fue inmune a los ataques contra la libertad de expresión. En Ucrania, por ejemplo, donde existía pluralismo de los medios

de comunicación, los ataques violentos contra periodistas eran habituales y casi nunca se investigaban de manera efectiva. En Turkmenistán, las autoridades llegaron a prohibir viajar al extranjero para evitar que se “difamara” a la patria. La libertad de asociación estuvo igualmente asediada. Por ejemplo, en Tayikistán, las ONG temían que las amplias atribuciones recién otorgadas al Ministerio de Justicia para obligarlas a presentar informes se utilizaran para silenciar las voces críticas. En Uzbekistán se adoptaron reformas económicas y de carácter general, pero persistían la tortura y otros malos tratos, y quienes trabajaban para oponerse a tales prácticas encontraban obstáculos burocráticos para inscribir en registro sus organizaciones. Los sistemas judiciales de países tan diversos como Moldavia y Armenia eran vulnerables a las presiones políticas. En Kirguistán, los tribunales volvieron a confirmar la sentencia y condena a cadena perpetua de Azimjan Askarov, defensor de los derechos humanos de etnia uzbeka, injustamente encarcelado desde 2010 por su labor de derechos humanos. Determinadas minorías étnicas, las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgénero e intersexuales (LGBTI), grupos religiosos como los Testigos de Jehová, y las personas con discapacidad mental o de otras clases sufrían discriminación, persecución judicial y, en ocasiones, violencia. La violencia de género y la violencia intrafamiliar dirigida específicamente contra mujeres, niñas y niños eran generalizadas.

Las instituciones internacionales y regionales encargadas tradicionalmente de promover y proteger los derechos humanos no se opusieron de manera efectiva a esta peligrosa corriente. Por ejemplo, en virtud de un acuerdo diplomático alcanzado en el Consejo de Europa, la delegación rusa volvió a la Asamblea Parlamentaria del Consejo cinco años después de haber visto suspendidos sus derechos de voto por la anexión ilegal de Crimea, a pesar de la falta de avances en los asuntos que habían dado lugar a las sanciones. El acuerdo causó una división profunda: una parte de la comunidad de derechos humanos rusa lo vio como una traición a los valores fundamentales del Consejo, mientras que otra consideró positivo mantener a Rusia dentro de la órbita del Consejo y que su población conservara la capacidad de recurrir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos.

Mientras, Rusia sentaba un peligroso precedente en la región al seguir denigrando el concepto mismo de derechos humanos. La legislación sobre “agentes extranjeros” y “organizaciones indeseables” se utilizó de manera sistemática contra ONG de derechos humanos y otras organizaciones, junto

con acciones penales y campañas de desprestigio en medios de comunicación controlados por el gobierno. Las autoridades rusas bajaron el listón hasta niveles inquietantes con nueva legislación que hacía extensiva la condición de “agentes extranjeros” a particulares, incluidos blogueros y blogueras y periodistas independientes.

En otros países de la región, los defensores y defensoras de los derechos humanos corrían un gran riesgo personal debido a su trabajo, aunque no fueran vilipendiados directamente en la legislación. En Uzbekistán, las autoridades continuaron hostigando y sometiendo a vigilancia a activistas de la sociedad civil, y el ingreso forzoso en un centro psiquiátrico de una bloguera que informaba sobre las protestas transmitió un mensaje disuasorio. En Tayikistán, la intimidación y las amenazas incesantes de detención arbitraria y de tortura y otros malos tratos contra profesionales del derecho confirmaron que quienes defendían los derechos humanos realizaban un trabajo especialmente peligroso. La represión de toda disidencia en Turkmenistán hacía imposible trabajar abiertamente sobre cuestiones de derechos humanos en el país.

Para empeorar las cosas, los conflictos no resueltos de toda la región seguían obstaculizando el desarrollo sólido y frenando la cooperación regional: Abjasia, Crimea, Dombás, Nagorno Karabaj, Osetia del Sur/Región de Tsjinvali y Transnistria sufrieron las consecuencias. En los territorios escindidos de Osetia del Sur/Región de Tsjinvali y Abjasia, las medidas que aplicaban las fuerzas rusas y las autoridades *de facto* para restringir físicamente la libre circulación con el resto de Georgia menoscababan las condiciones de vida y los derechos económicos, sociales y culturales de la población local.

A pesar de este aciago panorama, la región de Europa Oriental y Asia Central siguió la tendencia mundial a medida que el poder popular entró en acción. Ciudadanos y ciudadanas corrientes de toda la región salieron a la calle en mayor número que en años anteriores para reclamar rendición de cuentas por las injusticias, el derecho a hacer oír su voz y a decidir su presente y su futuro, el derecho a la libertad de expresión y de reunión pacífica y una vida mejor para sus comunidades ante el deterioro progresivo de los niveles de vida, la discriminación y la desigualdad económica y social. También reivindicaban un entorno saludable, asistencia médica accesible, igualdad de género y medidas efectivas contra la violencia de género en el ámbito familiar. Continuó reprimiéndose con

violencia la libertad de reunión pacífica en muchos países, pero el poder de la calle demostró que la gente conocía la importancia de esa libertad y tenía la valentía suficiente para reclamarla.

En Georgia, la continuación del conflicto con Rusia y el incumplimiento de las promesas de reforma electoral de las autoridades llevaron a miles de personas a congregarse en Tiflis. La contundente respuesta policial, que incluyó el uso de cañones de agua, no las desanimó. En Azerbaiyán, quienes intentaron manifestarse pacíficamente en Bakú se enfrentaron de forma reiterada a la brutal represión de toda disidencia política; les ocurrió, por ejemplo, a las mujeres que reclamaban rendición de cuentas y medidas eficaces para combatir la violencia de género en el ámbito familiar.

En Moldavia, la gente salió a manifestarse pacíficamente a la calle en respuesta a acontecimientos políticos decisivos, pero también por otros asuntos. Así, tras años de incansable activismo, tuvo lugar la mayor marcha LGBTI jamás celebrada en Chisináu, con protección efectiva de la policía. Lo mismo sucedió en Ucrania, donde la marcha del Orgullo de Kiev, la mayor celebrada hasta entonces, pasó de ser una mera exhibición de valentía a una auténtica celebración para sus participantes gracias a la eficaz protección de la policía frente a grupos violentos que propugnaban la discriminación. En ambos países, las elecciones dieron paso a una transición política pacífica. En el caso de Ucrania, con la continuación del conflicto armado en la región de Dombás como telón de fondo, las elecciones presidenciales contaron con la participación activa de todos los sectores de la población y dieron lugar a una renovación casi total de la clase política.

En otros lugares quedó descartada una transición política pacífica, y la respuesta fue la protesta en la calle. En Rusia, las manifestaciones más multitudinarias celebradas en años denunciaron no sólo un proceso electoral manipulado en Moscú y un sistema de justicia penal abusivo que actuaba selectivamente contra las voces disidentes, sino también el aumento de la censura en Internet, la corrupción y las prácticas nocivas para el medio ambiente. En Kazajistán, la protesta política pacífica de la ciudadanía y la represiva respuesta de las autoridades llevaron cada vez a más gente a salir a la calle. El carácter multitudinario de estas manifestaciones quedó bien patente cuando las autoridades convocaron elecciones anticipadas para legitimar el traspaso de la presidencia de Nursultan Nazarbaev a Kassym-Jomart Tokayev permitiendo que Nazarbaev

conservara importantes poderes. No hubo una verdadera competición política en las elecciones, y la respuesta popular fue la protesta, más creativa e inspiradora que nunca. En Uzbekistán, donde la masacre de Andiyán de 2005 parecía haber sofocado el ánimo de contestación más allá de algunos actos ocasionales de protesta individual, los proyectos de rehabilitación urbana emprendidos en la capital, Tashkent, y en otras ciudades provocaron manifestaciones populares contra la destrucción en gran escala de centenares de viviendas, muchas de ellas situadas en barrios tradicionales, o *mahallas*. Propietarios e inquilinos denunciaban no haber sido avisados a tiempo de su desalojo ni haber recibido alojamiento alternativo o indemnización adecuada.

En primera línea de estas protestas e iniciativas había cada vez más jóvenes y mujeres. Contra todo pronóstico, el llamamiento en favor de la justicia, la rendición de cuentas y los derechos humanos gozaba de buena salud en las nuevas generaciones y entre quienes habían visto sus voces silenciadas en años anteriores. El poder popular está abriendo camino al futuro de los derechos humanos en Europa Oriental y Asia Central.